

## Trabajo Fin de Grado

Los efectos de la convivencia de uno de los ex-cónyuges con otra persona sobre el derecho de uso de la vivienda familiar y la pensión de alimentos.

The effects of the cohabitation of one of the ex-spouses with another person on the right to use the family house and the maintenance payments

Autor

Ioan Adrián Buta

Director

Carlos Martínez de Aguirre Aldaz

Facultad de Derecho  
Curso Académico 2018-2019

## **ÍNDICE**

### **I. LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS**

### **II. INTRODUCCIÓN**

### **III. LA VIVIENDA FAMILIAR**

#### **1. CONCEPTO**

#### **2. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR**

##### **2.1 Existencia de hijos económicamente dependientes**

##### **2.2 Falta de hijos económicamente dependientes**

#### **3. PÉRDIDA DEL CARÁCTER FAMILIAR DE LA VIVIENDA**

#### **4. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS UNIONES DE HECHO**

### **IV. INTERÉS DEL MENOR**

### **V. CONSIDERACIÓN ESPECIAL DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN PLENO), NÚM. 641/2018 DE 20 DE NOVIEMBRE**

#### **1. SUPUESTO DE HECHO Y NOVEDAD AÑADIDA POR LA SENTENCIA**

#### **2. ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL**

### **VI. LA PENSIÓN DE ALIMENTOS: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1ª), NÚM. 33/2017, DE 19 DE ENERO.**

#### **1. CONCEPTO DE PENSIÓN DE ALIMENTOS**

#### **2. SUPUESTO DE HECHO**

#### **3. DOCTRINA DEL TRIBUNAL**

#### **4. OTRAS CONSIDERACIONES**

## **VII. VALORACIÓN CRÍTICA**

## **VIII. BIBLIOGRAFÍA**

### **1. LEGISLACIÓN**

### **2. JURISPRUDENCIA**

### **3. DOCTRINA**

## **IX. ANEXOS**

## **I. LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS**

- AH: Antecedente de Hecho
- AP: Audiencia Provincial
- APCC: Anteproyecto
- Art.: Artículo
- FD: Fundamento de Derecho
- STC: Sentencia del Tribunal Constitucional
- STS: Sentencia del Tribunal Supremo
- Ss: Siguietes
- CC: Código Civil
- CCCat: Código Civil de Cataluña
- CE: Constitución Española

## **II. INTRODUCCIÓN**

El Código Civil afirma que el matrimonio se disuelve por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio (artículo 85 CC). El divorcio es una figura de gran aplicación en la práctica desde que se implantó en el año 1981 mediante la Ley 30/1981, 7 de julio, por la que se modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.

Desde la implantación de esta ley en España, la libertad que tienen los individuos de disolver su vínculo matrimonial ha producido un aumento en la tasa de divorcio. Tal y como afirmó en 2015 el Instituto de Política Familiar, *«de cada diez matrimonios que se producen en España, siete acaban en ruptura»*.<sup>1</sup>

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística nos ofrece datos más concretos: durante los años 2005-2017, tras experimentar un aumento repentino desde 2005 (72.848 divorcios) hasta 2006 (126.952 divorcios)<sup>2</sup>, la tasa de divorcios sufrió un leve descenso hasta el año 2015, en el cual se produjeron un total de 101.357 procesos de disolución matrimonial, de los cuales 96.562 finalizaron en divorcio.<sup>3</sup> Más recientemente, en 2017, se produjo un ligero aumento de procesos de disolución matrimonial (102.341) y de divorcios (97.960). No obstante ello, la duración media de los matrimonios ha experimentado también un ligero incremento en 2017 (16,6 años) desde 2015 (16,2 años).<sup>4</sup>

El divorcio puede producirse de dos maneras: mediante un convenio regulador, en caso de que no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada

---

<sup>1</sup> Informe “Nupcialidad y Ruptura en España 2015”. Instituto de Política Familiar.

<sup>2</sup> El factor esencial por el que se produjo este aumento fue la reforma del CC y la LEC que se produjo en el año 2005 a través de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio., que aseguró una mayor libertad a los cónyuges a la hora de tomar la decisión (conjunta o unilateral) de separarse o divorciarse.

<sup>3</sup> Página web oficial del Instituto Nacional de Estadística: Nulidades, separaciones y divorcios. Estadística realizada en virtud del Convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de fecha 14 de febrero de 1995 y posteriores adendas.

(Disponible en:

[http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176798&menu=ultiD atos&idp=1254735573206](http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176798&menu=ultiD atos&idp=1254735573206) )

<sup>4</sup> Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. Año 2017. Instituto Nacional de Estadística. (Publicado: 24 de septiembre de 2018). Disponible en:

[http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176798&menu=ultiD atos&idp=1254735573206](http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176798&menu=ultiD atos&idp=1254735573206)

judicialmente que dependan de sus progenitores (artículo 87 del Código Civil); o decretándose judicialmente (artículo 86 del Código Civil).

Una vez se lleve a cabo, se producirán los siguientes efectos: en primer lugar, la disolución del matrimonio; en segundo lugar, se fijará la pensión de alimentos de los hijos y la eventual compensación económica para el cónyuge; en tercer lugar, la atribución de la vivienda familiar; y, por último, en su caso, la liquidación de la sociedad de gananciales.

Además de por la relevancia de la figura mencionada, la razón de la elección de este tema radica también en la importancia que da el ordenamiento jurídico a la vivienda (artículo 47 Constitución Española), concretamente, a la vivienda como factor esencial para el correcto desarrollo y protección de la familia (artículo 39 Constitución Española). Igualmente, la transcendencia de este tema va más allá, puesto que entra en juego el principio del interés del menor que condiciona las decisiones de los órganos jurisdiccionales relacionadas con asuntos que puedan afectarles, ya que, en caso de que existan hijos menores, este principio se encuentra presente durante todo el proceso del divorcio y, especialmente, a la hora de discernir el criterio de atribución de la vivienda familiar.

En este sentido cobra también importancia el tema de la pensión de alimentos y su condicionamiento en casos de convivencia con terceras personas, que será el tema puesto en relación con la nueva doctrina del Tribunal Supremo relacionada con el derecho de uso de la vivienda familiar.

En cuanto al objetivo y metodología de este trabajo, se trata de profundizar en la doctrina del Tribunal Supremo en relación a los efectos que produce la convivencia estable con un tercero en la vivienda familiar respecto del uso de la misma. Especialmente el trabajo se centrará en los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 641/2018 de 20 de noviembre, en la cual se determina la pérdida del derecho al uso de la vivienda familiar del ex-cónyuge que introduzca en la citada vivienda a una nueva pareja tras el divorcio; y, en su puesta en relación con la doctrina asentada por la Sentencia núm. 33/2017, de 19 de enero, que determina la reducción de la cuantía de la pensión de alimentos en el caso de que se produzca la misma situación de convivencia estable con un tercero.

Para ello examinaré todas las circunstancias relevantes que intervienen en tales decisiones, a saber: el concepto de vivienda familiar, los criterios de atribución de la misma, las nociones básicas de la pensión de alimentos y el principio del interés superior del menor.

### **III. LA VIVIENDA FAMILIAR**

#### **1. CONCEPTO**

El concepto de vivienda familiar no viene expresamente definido en el Código Civil, por tanto, debemos determinarlo a partir de la definición que este texto normativo da del domicilio y, especialmente, fijándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Así pues, el artículo 40 del Código Civil afirma que *«para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil.»*

Siguiendo el Código Civil, cabe advertir que los cónyuges tienen la obligación legal de vivir juntos<sup>5</sup>, por tanto puede entenderse que el lugar donde hayan decidido convivir es la vivienda familiar.

La STS 1199/1994, de 31 de diciembre ofrece el siguiente concepto de vivienda familiar a partir de los artículos del Código civil: *«bien familiar, no patrimonial, al servicio del grupo o ente pluripersonal que en ella se asienta, quien quiera que sea el propietario.»*

Por su parte, la STS 1085/1996, de 16 de diciembre la define como: *«el reducto donde se asienta y desarrolla la persona física, como refugio elemental que sirve a la satisfacción de sus necesidades primarias (descanso, aseo, alimentación, vestido, etc.) y protección de su intimidad (privacidad –sic–), al tiempo que cuando existen hijos es también auxilio indispensable para el amparo y educación de estos.»*

Por último, la STS de 31 de mayo de 2012 añade al concepto las notas de habitualidad y permanencia: *«la residencia habitual de la unidad familiar, en el sentido*

---

<sup>5</sup> Artículo 68 CC: *«Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.»*

*de que debe formar el lugar en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia.»*

En definitiva, se trata del lugar en el que los cónyuges cumplen con su obligación legal de convivir juntos, y donde se asienta el núcleo familiar, que permite a cada sujeto del mismo desarrollarse y tener satisfechas sus necesidades primarias, otorgándole un espacio de privacidad. En palabras del TS<sup>6</sup>, se exige una voluntad de permanencia en tal espacio por la nota estabilidad que, tradicionalmente, caracterizaba el matrimonio, cuestionada actualmente dada la existencia del divorcio unilateral sin causa.

## **2. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR**

Tal y como se extrae de la Sentencia mencionada de 31 de diciembre de 1994, la vivienda familiar es objeto de protección por el ordenamiento jurídico, *«tanto en situación normal del matrimonio como en los estados de crisis, separación o divorcio»*.

En las situaciones de crisis de la familia se establece una regla en el artículo 90 del Código Civil, referida al convenio regulador que pueden llevar a cabo los cónyuges para determinar la atribución del uso de la vivienda familiar en ciertos casos; y el artículo 96 del mismo texto normativo, que nos ofrece unas normas para que, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, se lleve a cabo a través de una resolución judicial.

### **2.1 Existencia de hijos económicamente dependientes**

Los cónyuges podrán decidir con cierta libertad, en virtud del artículo 90 CC, mediante convenio regulador, la atribución del uso de la vivienda familiar y ajuar familiar, el cual tendrá que ser aprobado por un Juez. Ello siempre que sus acuerdos no fuesen dañosos para los hijos o perjudicasen gravemente a uno de los cónyuges. Así pues, como ya he mencionado, el artículo 96 regula unas normas en defecto de pacto, que serán la base para los criterios explicados en este apartado.

La primera regla que contiene el citado precepto afirma que *«en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.»* Para comprender con claridad la transcendencia de su aplicación, hay que determinar si

---

<sup>6</sup> STS de 31 de mayo de 2012



con «*hijos*» el legislador se refiere solamente a los hijos menores de edad o también los hijos mayores de edad económicamente dependientes de los progenitores.

Parte de la doctrina entiende que los hijos mayores de edad quedan incluidos en el marco del artículo, en tanto este habla de «*hijos*» y no de «*hijos menores de edad*». Además, consideran la vivienda como uno de los elementos que integran el derecho de alimentos, y utilizan un argumento basado en la realidad social, gracias a la cual observamos que los hijos, una vez pasados los dieciocho años, no son capaces de procurarse por sí mismo la subsistencia, puesto que el cambio de la minoría de edad a una mayoría de edad no presupone directamente la independencia económica de una persona. Por tanto, tal y como afirma esta parte de la doctrina, el elemento clave para tener en cuenta a los hijos mayores de edad en aplicación de este precepto es la dependencia económica respecto de los padres.<sup>7</sup>

Por otra parte, en contra de esta interpretación se ha posicionado el Tribunal Supremo, afirmando que «*la atribución del uso de la vivienda familiar en el caso de existir hijos mayores de edad, ha de hacerse a tenor del párrafo 3º del artículo 96 CC, que permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije a favor del cónyuge, cuando las circunstancias lo hicieran aconsejables y su interés fuera el más necesitado de protección*»<sup>8</sup> También la STS 31/2017 de 19 de enero, en relación a los casos de hijos mayores de edad incapacitados ha determinado que «*los hijos, menores y mayores, con o sin discapacidad, son acreedores de la obligación alimentaria de sus progenitores. Con la mayoría de edad alcanzada por alguno de ellos el interés superior del menor como criterio determinante del uso de la vivienda decae automática y definitivamente, y los padres pasan a estar en posición de igualdad respecto a su obligación conjunta de prestar alimentos a los hijos comunes no independientes, incluido lo relativo a proporcionarles habitación (art. 142 CC)*»<sup>9</sup>

Por tanto, el Tribunal Supremo entiende que, una vez decaído el principio del interés superior del menor al adquirir la mayoría de edad, la necesidad de vivienda se encuentra incluida dentro de la prestación de alimentos.

---

<sup>7</sup> CHAPARRO MATAMOROS. P. *Derecho de uso y vivienda familiar: su atribución judicial en los supuestos de crisis familiares*, pp. 117-122. Tirant Lo Blanch, 2018.

<sup>8</sup> STS núm. 624/2011, de 5 de septiembre (RJ 2011, 5677), extraído de CHAPARRO MATAMOROS. P. op. Cit.

<sup>9</sup> Extraído de STS núm. 167/2017, de 8 de marzo (RJ 2017, 1633)

En definitiva, entiendo que esta postura, pese a ser la más alejada a la realidad social –ya que, como reitero, la adquisición de la mayoría de edad no presupone la independencia de los hijos-, es la más correcta en términos jurídicos, en tanto el ordenamiento jurídico otorga una protección más fuerte a los menores de edad, de la cual no deberían beneficiarse los hijos mayores de edad, quienes pueden encontrar tal protección en la figura de la prestación alimenticia que menciona el Tribunal. Por tanto, esta norma se aplicará teniendo en cuenta el interés de los hijos menores de edad comunes al matrimonio. Así lo sostiene la ya citada STS 642/2011, de 5 de septiembre, afirmando que *«en el primer párrafo –del artículo 96 CC- se atribuye el uso de la vivienda a los hijos “como concreción del principio favor filii”, pero que cuando sean mayores de edad, rigen otras reglas. Así se dice: “Como primer argumento a favor del criterio contrario a extender la protección del menor que depara el art. 96.1º CC más allá de la fecha en que alcance la mayoría de edad se encuentra la propia diferencia de tratamiento legal que reciben unos y otros hijos [...]”»*<sup>10</sup>

En virtud de esta norma, la atribución del uso de la vivienda familiar no depende de ninguna forma del régimen económico matrimonial, puesto que, al atribuirse el uso a los hijos en virtud del principio del interés del menor –entendiendo integrados los hijos mayores de edad económicamente dependientes-, puede disfrutar de tal vivienda el cónyuge no propietario que haya obtenido la custodia de los mismos –o que conviva con los hijos, en caso de que estos sean mayores de edad-.

Así pues, pueden existir dos situaciones: que la custodia de los hijos sea compartida o individual. En el primero de los casos caben dos soluciones: bien que el uso de la vivienda sea rotatorio y los progenitores la ocupen alternativamente por los plazos que el órgano jurisdiccional crea convenientes; o bien que se atribuya tal uso al progenitor cuyo interés sea más necesitado de protección, lo que implica que en este caso serán los hijos los que irán cambiando periódicamente de domicilio.<sup>11</sup> Esta última solución parece alejarse de la norma, puesto que no se les otorga el uso de la vivienda a los hijos. No obstante, en ciertos casos en los que estos tengan ya esa necesidad de vivienda satisfecha, se exceptúa la atribución del uso de la vivienda familiar a los mismos para proteger el derecho de propiedad del titular de la vivienda. Esta situación lo determinan

---

<sup>10</sup> Extraído de STS núm. 183/2012 de 30 de marzo (RJ/2012/4584)

<sup>11</sup> CHAPARRO MATAMOROS. P. *Derecho de uso y vivienda familiar: su atribución judicial en los supuestos de crisis familiares* op. Cit. pp, 340-348, 2018

con mayor claridad los ordenamientos jurídicos autonómicos: el Código Foral aragonés, en su artículo 81.1ª afirma que *«en los casos de custodia compartida, el uso de la vivienda familiar se atribuirá al progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del mejor interés para las relaciones familiares.»*, y el artículo 233-20ª-3ª del Código civil catalán dice que *«no obstante lo establecido por el apartado 2, la autoridad judicial debe atribuir el uso de la vivienda familiar al cónyuge más necesitado en los siguientes casos: a) Si la guarda de los hijos queda compartida o distribuida entre los progenitores.»*

El sistema de custodia compartida, al decir del TS, es el más beneficioso para los menores, en tanto protege su interés favoreciendo el contacto de sus progenitores<sup>12</sup>.

En caso de que el sistema de custodia sea individual es de aplicación la regla general del artículo 96 CC, por la cual se le atribuye el uso de la vivienda a los hijos menores y al cónyuge en cuya compañía queden, asegurando así el principio constitucional según el cual *«los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda»* (art. 39.3 CE). No obstante, se puede entender que la aplicación automática de este precepto en estos casos, protegiendo el interés del menor en detrimento de otros intereses que merecen mayor protección, puede llevar a situaciones problemáticas. Así pues, entendiendo el artículo 96 CC junto a lo expuesto en el artículo 103.2º CC, que propugna que hay que tener en cuenta el interés familiar más necesitado de protección para determinar cuál de los ex-cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar, se abre la puerta a una interpretación más amplia sobre la atribución de la vivienda familiar, que permite tener el criterio del interés más necesitado de protección, y no exclusivamente el interés superior del menor, cuando éste último ya está asegurado.<sup>13</sup>

En tercer lugar, en caso de que existan varios hijos y queden uno/s bajo la custodia de un progenitor y otro/s bajo la custodia del otro, será aplicable el párrafo segundo del artículo 96, según el cual el Juez determinará *«lo procedente»* haciendo un ejercicio de

---

<sup>12</sup> STS 630/2018 de 13 de noviembre (RJ\2018\4930), FD QUINTO

<sup>13</sup> GIL MEMBRADO. C. *La vivienda familiar*, pp. 113-114, Editorial Reus, 2013.

ponderación de todos los principios en juego, atendiendo especialmente al interés más necesitado de protección y a la titularidad de la vivienda familiar.<sup>14</sup>

Por último, puede darse el caso de que se atribuya el uso de la vivienda al ex-cónyuge que no tenga la custodia de los hijos, cuando el ex-cónyuge custodio tenga medios suficientes para garantizar la necesidad de vivienda propia y la de sus hijos. Esta es la excepción a la norma de atribución a los hijos el uso de la vivienda familiar que, reitero, desarrollaré posteriormente.

## **2.2. Falta de hijos económicamente dependientes**

El apartado tercero del artículo 96 CC afirma lo siguiente: *«no habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección»*. Cabe mencionar que el uso de la vivienda *«podrá acordarse»*, por tanto, al tenor literal del artículo, es facultativo determinar tal uso judicialmente.

Esta situación engloba tanto los casos en los que no existan hijos, como en los casos en el que existan pero los padres estén privados de la patria potestad o los hijos no vivan en el domicilio familiar.<sup>15</sup>

El criterio seguido en este caso es el del interés más necesitado de protección y atendiendo siempre a las circunstancias particulares. Por tanto, en el caso de que sólo uno de los ex-cónyuges sea titular de la vivienda y en el otro no concurra necesidad de protección alguna, no hay problema en otorgarle el uso al titular de la vivienda. Por otro lado, si se entiende que el interés más necesitado de protección es el del ex-cónyuge no propietario y concurren circunstancias que aconsejen la atribución del uso de la vivienda familiar al mismo, siempre que tal interés se vea satisfecho por la atribución, se podrá llevar a cabo tal medida.<sup>16</sup>

Así pues, no se persigue proteger el interés del menor –ya que en este caso no lo hay-, sino que más bien la atribución se realiza *«por razones de solidaridad familiar, garantizando una vivienda al cónyuge que tuviera más necesidad de ocupar la vivienda*

---

<sup>14</sup> STS 268/2018, de 9 de mayo de 2018, FD SEGUNDO

<sup>15</sup> GIL MEMBRADO. C op. Cit. p. 158

<sup>16</sup> GIL MEMBRADO C. op. Cit. pp. 158-159

*familiar al poseer menos recursos o medios económicos para hacer frente a la necesidad habitacional.»*<sup>17</sup> Incluso existe doctrina que entiende que esta atribución realizada por vía del art. 96.3ª CC está en estrecha relación con la compensación económica por el desequilibrio económico sufrido a consecuencia de la separación o del divorcio.<sup>18</sup>

### **3. PÉRDIDA DEL CARÁCTER FAMILIAR DE LA VIVIENDA**

El carácter familiar de la vivienda deriva, según lo ya visto, de dos notas básicas: desarrollo de la vida familiar y habitualidad. Además de estos, cabe tener en cuenta la nota de habitabilidad, excluyendo por tanto los *«espacios insalubres o que no reúnan condiciones mínimas de habitabilidad.»*<sup>19</sup>

Para determinar en qué momento la vivienda ha perdido este carácter de familiar hay que tener en cuenta que el carácter de “familiar” no es inmutable respecto a una vivienda. Es decir, cabe la posibilidad de que, por ejemplo, una familia tenga dos viviendas, una en la que residen habitualmente y otra que tienen para cualquier otro uso ajeno a la convivencia. En caso de que decidiesen pasar a residir en esta segunda vivienda, esta adquiriría el carácter de familiar y, por tanto, la primera dejaría de considerarse como tal, por encontrarse el núcleo familiar fuera de ella. Esta es una situación que se produciría vigente la relación matrimonial.

En caso de crisis matrimonial, el parámetro a seguir es otro, puesto que, al atribuirse el uso de la vivienda a uno de los ex-cónyuges (ya sea en virtud del art. 90 CC o del art. 96 CC), una parte del núcleo familiar ha dejado de residir en la vivienda familiar. Así pues, se entiende que la vivienda será familiar, una vez adjudicada, hasta

---

<sup>17</sup> CHAPARRO MATAMOROS. P. *Derecho de uso y vivienda familiar: su atribución judicial en los supuestos de crisis familiares* op. cit. p. 410.

<sup>18</sup> GIL MEMBRADO. C. op. Cit. p. 158

<sup>19</sup> CHAPARRO P. *La pérdida del carácter “familiar” de la vivienda en la que se había desarrollado la convivencia conyugal. Comentario a la STS NÚM. 524/2017 de 27 de septiembre.* Rev. Boliv. de Derecho Nº 25, enero 2018, ISSN: 2070-8157, pp. 620-635. P. 625

el momento en que finalice el periodo asignado de uso<sup>20</sup>, que es el momento en el que «dejará de ofrecer protección a los integrantes de la familia ex art. 96.1 CC»<sup>21</sup>

Es interesante tomar en consideración la STS 525/2017, de 27 de septiembre, que trata un supuesto en el que el Tribunal determinó que la vivienda litigiosa había perdido el carácter de familiar. El litigio nace a partir de la atribución de la vivienda familiar a través de convenio regulador al ex-cónyuge no custodio. Este ex-cónyuge (el ex-marido) interpuso demanda para que la guarda y custodia de la hija menor común fuese compartida, y, por su parte, su ex-esposa formuló demanda reconvencional para que se le atribuya el uso de la vivienda a su hija menor y a ella. Frente a esto, la doctrina del Tribunal Supremo entiende que la vivienda perdió el carácter de familiar una vez atribuido su uso al ex-marido en el convenio regulador, ya que, dado que la ex-esposa compró otra vivienda a la que se trasladó para vivir con su hija, las necesidades de habitación de esta quedaron cubiertas.<sup>22</sup>

La atribución de la vivienda en este caso tendría que haberse hecho teniendo en cuenta el principio del interés superior del menor –como se verá en los apartados posteriores-. No obstante, como la necesidad de vivienda –y, por tanto, el interés del menor- ya estaba satisfecho, la atribución de la vivienda se pudo hacer a través de convenio regulador. Siguiendo lo ya expuesto en este apartado, la vivienda perdió su carácter de familiar al dejar de ofrecer protección a los integrantes de la familia ex art. 96 CC.

Por su parte, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado acerca de este tema, afirmando en relación al art. 96 CC, que existen una serie de circunstancias que impiden la atribución del uso de la vivienda, eliminando así el rigor de la norma. Una de estas circunstancias es la pérdida del carácter familiar de la vivienda que, según el TS, se producirá cuando no cumpla con «el derecho y deber propio de la relación», diferenciando así el «uso que se hace de la misma –la vivienda- vigente la relación

---

<sup>20</sup> Hay que tener en cuenta que la asignación del derecho de uso de la vivienda familiar siempre va a ser «temporal, provisional y limitado», puesto que no se puede hacer uso de la vivienda *sine die*. VERDERA IZQUIERDO B. *Estudio de los últimos postulados referentes a la atribución del uso de la vivienda familiar. La “necesidad de vivienda”* Revista InDret, Barcelona, 2016. p. 37

<sup>21</sup> CHAPARRO P. *La pérdida del carácter “familiar” de la vivienda en la que se había desarrollado la convivencia conyugal. Comentario a la STS NÚM. 524/2017*, op. Cit. p. 626

<sup>22</sup> CHAPARRO P. *La pérdida del carácter “familiar” de la vivienda en la que se había desarrollado la convivencia conyugal. Comentario a la STS NÚM. 524/2017*, op. Cit. pp. 622 Y 623

*matrimonial [...]» y el uso que se haga de esta cuando «no sirve a los fines del matrimonio».*<sup>23</sup>

En su nueva jurisprudencia, el TS reafirma esta doctrina en relación a la pérdida del carácter familiar de la vivienda por la convivencia estable con un tercero, tema que será explicado en los apartados siguientes.

#### **4. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS UNIONES DE HECHO**

El artículo 39 CE protege a la familia en general, no exclusivamente a la familia matrimonial; sin embargo, no puede esperarse que se apliquen las disposiciones dedicadas a la familia matrimonial del Código civil a una realidad jurídica que está fuera de la institución del matrimonio, en tanto esta última está amparada a través de un *«derecho constitucional (art. 32 CE), cuyo régimen jurídico corresponde a la ley por mandato constitucional (art. 32.2 CE), mientras que nada de ello ocurre con la unión de hecho more uxorio, que ni es una institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su establecimiento»*<sup>24</sup>

Frente a ello no puede invocarse el derecho fundamental a la no discriminación (art. 14 CE), puesto que este no exige la igualdad entre estas dos realidades, *«dejando a salvo el principio de igualdad entre los hijos, cualquiera que sea su filiación»*.<sup>25</sup>

Ambas instituciones responden a razones diferentes, así lo señala el Pleno del Tribunal Supremo cuando afirma que *«es preciso proclamar que la unión de hecho es una institución que nada tiene que ver con el matrimonio [...], es más, hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias»*<sup>26</sup>

No cabe la aplicación analógica del art. 96.III a las uniones de hecho en caso de que no existan hijos menores de edad, no siendo posible atribuir el uso de la vivienda

---

<sup>23</sup> STS núm. 563/2017, de 17 octubre (RJ\2017\4528), FD Segundo.

<sup>24</sup> STC núm. 93/2013, de 23 abril (RTC/2013/93)

<sup>25</sup> DE VERDA Y BEAMONTE. J.R. *La atribución del uso de la vivienda familiar en casos de divorcio en derecho español: la superación del derecho positivo por la práctica jurisprudencial*. Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm.3 bis, noviembre 2015, p. 37.

<sup>26</sup> STS 12 de septiembre 2005 (RAJ 2005\7148).

familiar al conviviente más necesitado de protección, como se propugna en el precepto mencionado<sup>27</sup>.

Ahora bien, en base a la no discriminación de los hijos, principio que propugna el art. 14 CE y, especialmente, el art. 108.II CC, en caso de que existan hijos económicamente dependientes se tendrán que aplicar las disposiciones del art. 96. CC a las uniones de hecho analógicamente<sup>28</sup>.

#### **IV. EL INTERÉS DEL MENOR**

El principio jurídico del interés del menor es un factor que se tiene en cuenta a lo largo de todo el proceso en este tipo de litigios, puesto que, sin perjuicio de la facultad del Juez de decidir lo contrario, *«la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor [...]»*<sup>29</sup>.

Se encuentra enunciado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que dice lo siguiente: *«Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.»* Como refuerzo a esta protección, se encuentra también la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La regla del artículo 96, según la cual se les atribuye a los hijos y al cónyuge custodio el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella, funciona como una seguridad para el menor, permitiéndole seguir en el mismo entorno en el que se encontraba con anterioridad a la ruptura del matrimonio, limitando el perjuicio que

---

<sup>27</sup>DE VERDA Y BEAMONTE. J. R., op. cit. p. 39

<sup>28</sup>CHAPARRO MATAMOROS. P. *Derecho de uso y vivienda familiar: su atribución judicial en los supuestos de crisis familiares* op. cit. p. 279-280

<sup>29</sup>STS 221/2011, de 1 de abril



pueda llegar a «*experimentar a causa de la pérdida de contacto y relación con uno de sus progenitores*»<sup>30</sup>

La Sentencia a partir de la cual nace esta nueva doctrina<sup>31</sup> también contempla el tema que se trata en este epígrafe, a partir de jurisprudencia anterior<sup>32</sup>. Añade que, además de mantener a los hijos en el mismo ambiente familiar de la vivienda, es importante que los padres reaccionen adecuadamente en cuanto a la circunstancia económica que se sucede tras el divorcio, asegurando la vivienda y los alimentos propios y de los hijos. El Tribunal pretende incluir las situaciones más comunes tras una ruptura, las cuales no suelen producir efectos económicos positivos para ninguna de las partes y, en especial, para los hijos; en efecto, hay ciertos factores que pueden impedir una cobertura económica adecuada, como la imposibilidad de disposición sobre el patrimonio común -hasta la liquidación de la sociedad de gananciales-, la necesidad de adquirir una segunda vivienda por parte del ex-cónyuge que tuvo que abandonar la vivienda familiar, o, simplemente, la división del patrimonio cuando este es reducido.

Haciendo referencia a la Ley Orgánica de Protección del Menor, el Tribunal recuerda que el interés del menor es prevalente, siempre y cuando «a) *que este interés no restrinja o limite más derechos que los que ampara y b) que las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados, primando, en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, el interés superior del menor sobre cualquier otro que pudiera concurrir*».

Así pues, queda claro que el interés del menor prevalece frente a cualquier otro interés, con ciertos matices, puesto que se ha de valorar el impacto que las medidas tomadas en su consideración pueda tener en perjuicio de derechos fundamentales o intereses legítimos de otras personas. Además, existen dos límites más a la aplicación de este principio, jurisprudencialmente aceptados y mencionados en la Sentencia de estudio: en primer lugar, la pérdida del carácter de familiar de la vivienda litigiosa; y, en

---

<sup>30</sup> CHAPARRO MATAMOROS. P. *Derecho de uso y vivienda familiar: su atribución judicial en los supuestos de crisis familiares* op. cit. pp. 76-77, 2018, Tirant Lo Blanch.

<sup>31</sup> STS 641/2018, de 20 de noviembre (RJ\2018\5086)

<sup>32</sup> STS 221/2011, de 1 de abril; 236/2011, de 14 de abril; 257/2012, de 26 de abril; 117/2017, de 22 de febrero; y, 168/2017 de 8 de marzo

segundo lugar, la existencia de una vivienda alternativa en la que el hijo pueda encontrar satisfecha su necesidad de vivienda.<sup>33</sup>

Mediante el primer límite es como el Tribunal valora que esta nueva jurisprudencia no vulnera el principio jurídico del interés del menor, ya que entiende que en este caso la vivienda que anteriormente sirvió al matrimonio, dejó de hacerlo y empezó a ser usada por una pareja diferente y, por ello, deja de tener el carácter de familiar, razón que entiende suficiente para no aplicar este principio y retirar el derecho al uso de la vivienda familiar a la usuaria actual. Es decir, la vivienda dejó de ser familiar una vez se produjo el divorcio y entró un tercero a residir en ella, momento en el cual la atribución de la vivienda dejó de producir los efectos protectores del artículo 96 CC.

La Sentencia 563/2017, de 17 de octubre abre la puerta a una nueva situación en la que se encuentran conviviendo en la misma vivienda dos cónyuges con su hija común y la hija del padre fruto de una relación anterior. La vivienda no es propiedad de ninguno de los cónyuges, ya que su titularidad la ostentan los padres del ex-marido. Al no ser una situación contemplada en el Código Civil, la jurisprudencia del Supremo se encarga de aplicarlo analógicamente.

El Tribunal atribuyó el uso de la vivienda al padre, pese a no tener la custodia de la menor común, porque valoró que la segunda vivienda de la madre era adecuada para proporcionarle a la menor común lo necesario para su desarrollo vital; y, además, permitía que el padre ocupase la vivienda litigiosa junto a su hija de la unión anterior, para impedir que tal menor vea perjudicado su interés. Es decir, en este caso concurrían diferentes intereses en el supuesto de hecho, prevaleciendo siempre el interés superior del menor. Ahora bien, aunque se ha de atender al interés de los menores comunes de la pareja que entabla el litigio, las circunstancias de este supuesto condicionaron que el Tribunal tuviese en cuenta el interés de la hija menor no común de los ex-cónyuges, puesto que el interés de la otra menor y el de la madre de la misma ya estaba satisfecho con el uso de otra vivienda propiedad de esta última.

La madre recurrió ante el TS porque no se tuvo en cuenta en apelación el interés de su hija menor común para atribuir el uso de la vivienda familiar a esta. A ello responde el TS diciendo que *«es, sin embargo, hecho probado de la sentencia que la vivienda*

---

<sup>33</sup> STS 563/2017, de 17 de octubre (RJ 2017\4528)

*litigiosa ha constituido la residencia familiar estable de ambas niñas, su lugar de encuentro, durante periodos amplios, pese a no ser propiedad de ninguno de los progenitores, lo que ha permitido no solo una efectiva comunicación entre las hermanas de vínculo sencillo, sino cumplimentar una de las indicaciones en las que el Código Civil objetiva el interés del menor: procurar no separar a los hermanos (artículo 92.5)»<sup>34</sup>*

Por tanto, queda demostrado que el TS valora el interés del menor, pero no solamente del menor común de los litigantes, sino el interés de todos los menores que puedan verse afectados por las medidas y decisiones tomadas.

**V. CONSIDERACIÓN ESPECIAL DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN PLENO), NÚM. 641/2018 DE 20 DE NOVIEMBRE**

**1. SUPUESTO DE HECHO Y NOVEDAD AÑADIDA POR LA SENTENCIA**

El supuesto de hecho, en resumen, tiene que ver con de las medidas que se toman en relación al uso de la vivienda familiar que ocupaban un matrimonio y sus hijos menores de edad.

En un primer momento, tras la disolución del matrimonio, se le atribuyó el uso de la vivienda a la madre, ex-cónyuge custodio, y a sus hijos. En dicha vivienda comenzó a convivir un tercero junto a la madre y los hijos menores de edad. Frente a ello, el padre interpuso demanda de juicio sobre modificación de medidas contra su ex-esposa, para que el Tribunal acordara la extinción del derecho de uso de la vivienda, pudiendo las partes proceder a la venta de la misma o a su adjudicación a uno de ellos con el consiguiente abono al otro del importe correspondiente; y, alternativamente, una reducción en la pensión de alimentos que el padre debía satisfacer.<sup>35</sup> La ex-esposa se opuso a sus pretensiones y el Juzgado las estimó parcialmente, manteniendo el uso y disfrute del domicilio familiar a la madre; y reduciendo el importe de la pensión alimenticia que el padre abonaba por sus hijos.

---

<sup>34</sup> STS 563/2017, de 17 de octubre (RJ 2017\4528), FD SEGUNDO

<sup>35</sup> STS 641/2018 (RJ\2018\5086). AH Primero

Contra esta Sentencia, el padre interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid, la cual dictó Sentencia el 15 de enero de 2018, declarando extinguido el uso de la vivienda familiar atribuido a la ex-esposa e hijos en el momento en que se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales.

El Ministerio Fiscal, interpuso recurso de casación por infracción del art. 96 CC contra la Sentencia de la AP de Valladolid, por vulneración del principio prioritario del interés del menor.

La cuestión controvertida a partir de la que nace el litigio y sobre la que el TS sienta jurisprudencia en esta Sentencia, son las consecuencias que conlleva la convivencia estable del progenitor y los hijos menores con una nueva pareja del primero, respecto del uso de la vivienda familiar que, hasta ese momento, servía a los fines del matrimonio ya disuelto. En este caso, es la ex-esposa la que introduce a su nueva pareja dentro de la vivienda.

El TS, con anterioridad, ya se planteó los efectos de la existencia de una nueva pareja tras el divorcio en relación a la pensión de alimentos<sup>36</sup>, pero, hasta este momento, no sentó doctrina jurisprudencial respecto a los efectos que producía en cuanto al uso de la vivienda familiar.

La doctrina, por su parte, recoge entre los supuestos de extinción del derecho de uso de la vivienda familiar *«que el cónyuge usuario de la vivienda contraiga segundas nupcias o conviva en situación de análoga afectividad a la matrimonial con otra persona»*, que es un supuesto contemplado en la legislación autónoma catalana y vasca<sup>37</sup>. No obstante, solamente en el caso de que *«[...] no existan hijos o sean ya económicamente dependientes, pues si los hijos siguen cohabitando con el cónyuge usuario, el hecho de que éste conviva con un nuevo compañero sentimental no es determinante para la extinción del derecho de uso, ni tampoco obstáculo para su atribución inicial, si dicha convivencia no resulta perjudicial para los menores [...]»*<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> STS 33/2017, de 19 de enero de 2017

<sup>37</sup> Arts. 233-24.2.b) CCCat. Y 12.11.d) Ley del País Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores.

<sup>38</sup> CHAPARRO MATAMOROS. P. *Derecho de uso y vivienda familiar: su atribución judicial en los supuestos de crisis familiares* op. cit. p. 229.

## 2. ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL

La AP de Valladolid, en su Sentencia, afirmaba que la vivienda es familiar en cuanto sirve a un determinado grupo familiar, incluso desmembrado tras una crisis matrimonial. Por tanto, consideraba que la vivienda litigiosa tenía ese carácter de familiar antes de que se produjera la convivencia de la ex-esposa con la nueva pareja en tal vivienda. Por ello, entendía que, como esta dejó de servir a los fines del matrimonio, no habían razones para que la ex-esposa (que es la ex-cónyuge custodio) y sus hijos sigan manteniendo el uso de la misma tras la liquidación de la sociedad de gananciales<sup>39</sup>.

El TS, apoyando los argumentos de la AP, interpreta el artículo 96 CC de la siguiente manera:

El derecho de uso de la vivienda familiar se otorga y se mantiene en tanto esta conserve su carácter familiar, característica de la que la vivienda dejó de gozar tras la entrada de un tercero ajeno a la familia en la misma con voluntad de permanencia. Tal y como menciona la Sentencia de la AP de Valladolid, y como reitera el TS, *«[...] la introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta y diferente [...]»*<sup>40</sup>.

Se reitera la importancia del interés de los menores; sin embargo, se afirma que no pueden mantenerse en un inmueble que no tenga el carácter de vivienda familiar tras la liquidación de la sociedad de gananciales.

Teniendo en cuenta el interés del menor mencionado, el Tribunal abre la puerta a una conciliación de intereses entre el interés del menor y el interés de sus padres. Se favorece al interés más necesitado de protección y pone la carga de actuar en beneficio de los hijos respecto de la vivienda sobre los progenitores, sobre todo respecto de la madre, ex-cónyuge custodio, a la cual se le presenta la opción de adquirir la mitad de la

---

<sup>39</sup> Así lo entendía por la definición que se daba en la Sentencia de la Sala Primera de 19 de noviembre de 2013, que consideraba la vivienda familiar como *«aquella en que la familia haya convivido, con una voluntad de permanencia»*; y, por tanto, desapareciendo la familia, se produce la pérdida del carácter familiar de la vivienda litigiosa.

<sup>40</sup> Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia del Tribunal Supremo 641/2018, de 20 de noviembre (RJ\2018\5086)

vivienda o venderla (junto con el otro ex-cónyuge propietario) para comprar otra en la cual se pueda cumplir con la exigencia que deriva del interés del menor.<sup>41</sup>

El Tribunal reafirma el derecho constitucional a la libertad personal y al libre desarrollo de la personalidad para poder «*establecer nuevas relaciones de pareja con quien se estime conveniente*», pero, sin obviar el uso que puede hacerse de esta libertad para perjudicar a otros<sup>42</sup>, como en este caso, en el cual se perjudica al ex-cónyuge no custodio, que se ve privado de la vivienda en la que solía residir, cuyos gastos tiene que soportar aún.

Por tanto, el Tribunal en este caso resuelve extinguir el derecho de uso de la vivienda familiar a la actual usuaria en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales por las razones expuestas, lo cual no produce efectos sobre la custodia de los menores. Siendo que los menores conservan su derecho a una vivienda, se atribuye a los progenitores la carga de hallar una vivienda alternativa idónea para cubrir las necesidades de estos.

## **VI. LA PENSIÓN DE ALIMENTOS: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1ª), NÚM. 33/2017, DE 19 DE ENERO**

### **1. CONCEPTO DE PENSIÓN DE ALIMENTOS**

El artículo 93 del Código civil<sup>43</sup> regula la obligación que los progenitores tienen tras el divorcio de contribuir a las cargas económicas de la manutención de sus hijos, en cumplimiento del mandato constitucional de prestación de asistencia a los hijos para asegurar su subsistencia. Concretamente, respecto a los hijos no emancipados que se encuentran bajo la patria potestad de los progenitores, el artículo 154 CC afirma que es deber de los padres alimentarlos, siempre en interés de los primeros<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup>FD Segundo STS núm. 641/2018 de 20 de noviembre (RJ\2018\5086).

<sup>42</sup>Ibid

<sup>43</sup> «El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento.

Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código.»

<sup>44</sup> La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función

Es decir, siguiendo a MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, la obligación legal de alimentos es aquella en virtud de la cual «una persona (el acreedor) carente de suficientes recursos propios, tiene derecho a reclamar de otra u otras (deudor o deudores), a las que está unida por determinados vínculos familiares (matrimonio o parentesco), lo necesario para su subsistencia, en los términos y con la amplitud fijados por la ley»<sup>45</sup>

La obligación nace a partir de que la persona los necesite para subsistir<sup>46</sup> -que en el caso de los menores será, salvo rara excepción, siempre-. Sin embargo, y en relación al tema que nos incumbe, esta obligación de alimentos puede ser reducida o limitada en caso de que se vea satisfecha por un tercero -o, bajo determinadas circunstancias, cuando el alimentante no pueda hacerle frente-<sup>47</sup>. Esta circunstancia de convivencia con un tercero es la tratada en la Sentencia del TS que se analiza en este apartado.

## 2. SUPUESTO DE HECHO

Los Antecedentes de Hecho de la Sentencia giran en torno al litigio entre un matrimonio con dos hijos menores, cuya custodia ostentaba la madre de los mismos. Se extrae de la Sentencia que la ex-esposa convive junto con los hijos menores en la vivienda familiar, propiedad del matrimonio. También se menciona que convive junto a su actual pareja y el hijo menor común de ambos en la mencionada vivienda. El litigio nació a partir de lo siguiente:

El ex-marido interpuso demanda ante el Juzgado de Primera Instancia nº. 2 de Majadahonda sobre modificación de medidas contra la ex-esposa exigiendo la reducción de la pensión de alimentos a los hijos menores (en la cantidad de 194,25 euros a cada uno de los hijos); pretensión que fue rechazada por el Juzgado.

Contra tal resolución, el ex-marido interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid con la misma pretensión, la cual fue estimada

---

*comprende los siguientes deberes y facultades: 1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 2.º Representarlos y administrar sus bienes.*

<sup>45</sup> MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ. C. *Curso de Derecho Civil (IV): Derecho de Familia*. Edisofer, 5ª Edición, 2016, P. 39.

<sup>46</sup> Artículo 148 CC: «La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda [...]»

<sup>47</sup> Teniendo en cuenta el art. 147 CC: «Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.»

parcialmente (teniendo que abonar mensualmente la cantidad de 300 euros por cada hijo).

No conforme con dicho resultado, la ex-esposa interpuso recurso extraordinario por infracción procesal<sup>48</sup> y recurso de casación frente al Tribunal Supremo. Este último se basa en la oposición de las resoluciones a la Jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en relación a la interpretación del artículo 146 CC y el juicio de proporcionalidad en el contenido de la pensión de alimentos. Ambos recursos son desestimados por el TS.

### 3. DOCTRINA DEL TRIBUNAL

El Tribunal denomina en esta Sentencia a esta situación como la formación de una «nueva familia»<sup>49</sup> que, para influir en la modificación de la cuantía de la pensión de alimentos que abona el ex-cónyuge no custodio y no usuario de la vivienda, tendría que haberse producido como un hecho nuevo tras acordar en la sentencia de divorcio la medida económica mencionada. Es decir, ha de ser un hecho que no se haya tenido en cuenta para la cuantificación de la pensión de alimentos.

Por otra parte, se exige que este hecho tenga transcendencia en el orden económico, que realmente pueda repercutir en la contribución de los gastos<sup>50</sup>, beneficiando a la nueva familia usuaria de la vivienda y perjudicando al ex-cónyuge no custodio. Así pues, basándose en razones de equidad y justicia, el Tribunal determina que esto ha de producir una modificación de la pensión de alimentos de los hijos, obligación que tienen que soportar ambos progenitores. Cabe recordar que esta obligación puede satisfacerse bien mediante el pago de la pensión que se fije, bien recibiendo y manteniendo en su casa al acreedor de la misma (art. 149 CC), ya que la vivienda se integra dentro del concepto de alimentos (art. 142 CC).

Así pues, el Tribunal tiene en cuenta que esta nueva familia se está beneficiando de la vivienda familia –por atribución de esta a los hijos-, lo cual debe producir efectos

---

<sup>48</sup> «Infracción de las normas procesales reguladoras de la resolución y su relación con la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos. Todo ello en base a los artículos 469.1.2 y 469.1.4 de la LEC por infracción del artículo 218 de LEC, en relación con los artículos 9.3. 24 y 120.3 de la Constitución Española así como el 3 y 93 del Código Civil» STS 33/2017, de 19 enero (RJ/2017/754), AH Cuarto.

<sup>49</sup> FD Primero

<sup>50</sup> En el caso que se trata, concretamente los gastos de comunidad de la vivienda (repartidos al 50%) y los gastos de la empleada de hogar, de los cuales se beneficia la nueva familia en perjuicio del demandante (el cónyuge no custodio).



sobre la contribución del progenitor custodio que convive con el menor. Es decir, dado que la nueva familia ocupa la vivienda familiar y, además, recibe una pensión de alimentos por parte del ex-cónyuge no custodio y no usuario de la vivienda, el TS considera justo que se produzca una equiparación de la contribución que ambos progenitores realizan, disminuyendo la cuantía correspondiente al ex-cónyuge no custodio.<sup>51</sup>

En definitiva, el TS no entra a realizar el juicio de proporcionalidad del art. 146 CC que se ha llevado a cabo en instancias anteriores, pero sí que valora que se ha aplicado correctamente, dados los datos que se tenían acerca de los gastos existentes al momento de fijarse los alimentos, *«de los que se beneficia la nueva familia en perjuicio del alimentante, y que motiva que la obligación de pago deba reducirse en razón a la entrada en escena de un tercero que necesariamente debe contribuir a estos gastos, estando como está integrada la vivienda en el concepto de alimentos [...]»*<sup>52</sup>

#### 4. OTRAS CONSIDERACIONES

La economía familiar tras una ruptura siempre se ve más debilitada, puesto que es frecuente que se produzca una división del patrimonio que antes era conjunto y/o que la contribución a las cargas de la vivienda y los hijos sea más difícil de llevar a cabo por la necesidad de cubrir otras necesidades, por ejemplo las necesidades de habitación del ex-cónyuge que no tenga derecho de uso de la vivienda familiar. Teniendo esto en cuenta, la carga de pagar una pensión de alimentos a los hijos puede suponer para el alimentante una dificultad para el mantenimiento de su propia persona.

La situación que se trata en este Trabajo -la convivencia con un tercero en la vivienda familiar- tiene un gran impacto en relación a las medidas tomadas respecto de la pensión de alimentos, puesto que puede suponer la modificación de estas para reducir o limitar la prestación alimentaria<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> En otras palabras, el Tribunal entiende que se está produciendo un enriquecimiento injusto por parte del ex-cónyuge custodio, que recibe una pensión para mantener a sus hijos y, además, encuentra un refuerzo en su nueva pareja que convive en su misma vivienda, la cual necesariamente tiene que contribuir a los gastos de la vivienda mencionados.

<sup>52</sup> FD PRIMERO

<sup>53</sup> STS 33/2017, de 19 de enero de 2017 [VLex., número de recurso 212/2015]. En esta misma Sentencia (FD PRIMERO) se afirma que la convivencia de un tercero afecta exclusivamente en la prestación alimentaria y no en el uso de la vivienda familiar: *«[...]Es decir, la presencia de un tercero en la vivienda*

En estos casos la persona que convive con el tercero en el hogar familiar está beneficiándose de la situación, en tanto le supone una reducción de las cargas domésticas -ya que el tercero contribuye a las mismas-, y además obtiene la prestación alimentaria que reciben los hijos del otro progenitor<sup>54</sup>. Este último se ve perjudicado, puesto que su situación no ha mejorado y, además, se ve obligado a "mantener" a un tercero en la que antes era su vivienda.

Un supuesto interesante en relación a esto es el de la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 557/2016, de 21 de septiembre (RJ/2916/4448), en la que el demandante de la modificación de medidas para conseguir una rebaja de la pensión alimenticia convive con una nueva pareja y ha tenido un hijo con la misma. Argumenta que, además de ello, se encuentra desempleado -igual que su pareja- y su situación económica ha empeorado. Esto abre la puerta a la reducción de la pensión de alimentos por existencia de un nuevo hijo. La Sala no observa procedente la reducción en tanto la obligación de alimentar proviene de un deber incondicional, con independencia de la posibilidad de cumplirlo; y, además, la voluntariedad de concebir al nuevo hijo, que hacía previsible el gasto que ello supondría.

Por tanto, está presente de nuevo el interés superior del menor, que condiciona las necesidades de los progenitores al cumplimiento de las suyas.

Otra situación importante que puede producirse es el hecho de que el progenitor, en lugar de decidir convivir con un tercero en la vivienda familiar cuyo uso le fue asignado, prefiera alojarse en una vivienda secundaria con el tercero y los menores. En este caso, las consecuencias difieren según haya habido acuerdo -o aceptación- entre los progenitores o no. En el primero de los casos no habría lugar a una modificación de la pensión alimenticia, mientras que si no existe acuerdo o aceptación, el progenitor que no decidió acerca del cambio de domicilio no debería verse obligado a soportar los eventuales gastos adicionales que puede conllevar<sup>55</sup>.

En este último supuesto lo relevante no ha sido la convivencia con una nueva pareja, sino el cambio de domicilio no aceptado que pueda suponer una carga injusta

---

*familiar, cuyo uso fue asignado a la esposa e hijos menores en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 del Código Civil, no se plantea desde la medida de uso, sino desde la prestación alimenticia[...]*»

<sup>54</sup> APARICIO CAROL, I. *La pensión de alimentos de los hijos en el Derecho español* p. 331, 2018, Tirant Lo Blanch.

<sup>55</sup> APARICIO CAROL, I. op. cit. p. 332, 2018, Tirant Lo Blanch.

para el ex-cónyuge no custodio. También puede incidir el hecho de que exista una tercera persona que, como se ha mencionado, contribuya a las cargas de la vivienda y la manutención de los hijos que convivan con él, y, por ello, haya lugar a una modificación de medidas para reducir la pensión alimenticia.

El tema de la pensión de alimentos choca directamente con la convivencia de una tercera persona en la vivienda familiar porque se suma al hecho de tener que soportar las cargas de la vivienda. Pese a que la primera se determina en función del patrimonio del progenitor, no deja de ser una obligación legal que tiene que cumplir de la manera que le sea posible, y, por ello es conveniente que, para asegurar un mínimo vital al alimentante, los Tribunales equilibren la pensión de alimentos para que esté acorde a la situación que se vive caso por caso en cada separación y así conseguir el mínimo perjuicio para ambas partes.

## **VII. VALORACIÓN CRÍTICA**

El tema que desarrollo en este Trabajo es especialmente delicado por la confluencia de intereses a proteger: el interés de los ex-cónyuges, el interés de los menores y el interés del ex-cónyuge - en el caso de que no lo sean ambos- o tercero que sea propietario de la casa. Por ello, debido a la complejidad del tema, afirmar una opinión tajante respecto al mismo resultaría imprudente.

Debido a lo comúnmente extendida y aceptada que se encuentra esta práctica –la disolución del matrimonio-, esta nueva jurisprudencia del Supremo tendrá efectos, favorables o no, en gran cantidad de parejas tras su ruptura, incluso con efecto retroactivo, puesto que a partir de este caso se impulsarán las demandas de modificación de medidas relacionadas con la vivienda familiar en otras parejas.

Considero que el Tribunal ha abierto una puerta a la malinterpretación de su propia jurisprudencia, en tanto se entiende que sus argumentos deberían ser aplicados en todo caso cuando se produzca esta situación de convivencia con una nueva pareja, mientras que, bajo mi punto de vista, la aplicación de esta nueva doctrina ha de hacerse con ciertos matices y de manera singular caso por caso, puesto que cada familia y cada separación o divorcio son diferentes aunque compartan similitudes, y aplicar la misma consecuencia de modo general podría poner en juego importantes intereses, tales como el del menor.

Hay que mirarlo desde la perspectiva de ambos ex-cónyuges o ex-miembros de la pareja involucrados, teniendo en cuenta todas las opciones que pueden darse en cada caso: puede darse la situación de que el interés del usuario no propietario de la vivienda que comienza a convivir con una nueva pareja realmente sea el más necesitado de protección, porque el propietario recibe ingresos suficientes y tiene una vivienda alternativa para satisfacer sus necesidades de habitación; o, por otra parte, puede ocurrir lo contrario, que el usuario no propietario actúe de mala fe y perjudique a la otra parte, propietaria de la vivienda. También pueden darse casos de justicia social por la que se atribuya la vivienda a la ex-esposa en supuestos de desigualdad de poder<sup>56</sup>.

También conviene estudiar el punto de vista de los hijos económicamente dependientes, los cuales se ven afectados -sobre todo si son menores- por la separación, y, además, como se da en el caso de la STS 641/2018, por el cambio de domicilio y ambiente, puesto que, pese a tener una vivienda alternativa donde satisfacer sus necesidades, esta puede encontrarse en una localidad diferente, alejando al menor del ambiente en el que solía desarrollarse.

Fijándonos en el interés superior del menor - el cual considero que es el más afectado, puesto que puede no tener la capacidad suficiente para comprender el proceso por el que está pasando su familia-, aunque la ruptura de la pareja y, por consiguiente, la posible separación del menor de uno de los progenitores sean difíciles de sobrellevar para un menor, considero que es más beneficioso para él esa situación que un hogar en continuo conflicto. También tengo en consideración que hay hijos menores que, por su capacidad de entendimiento puedan bien no comprender la situación, o bien comprenderla y asimilarla hasta tal punto que el impacto negativo sea mínimo. Por ello reitero la importancia de valorar la situación de cada familia individualmente.

A ello se añade el interés del ex-cónyuge custodio que, actuando de buena fe, una vez divorciado, con derecho al uso de la vivienda familiar junto con sus hijos, no tenga

---

<sup>56</sup> Los supuestos de violencia de género: Se intenta proteger esta situación a través del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente su apartado 7, que otorga el uso y disfrute de la vivienda familiar a las víctimas. El criterio a seguir sería el mismo: la atribución al interés más necesitado de protección, que es el de la víctima y el de los hijos menores, en su caso (<sup>56</sup> ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H., *La víctima de violencia de género y la atribución de la vivienda familiar*, en DE HOYOS SANCHO, M. (coord.), *Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales*, Lex Nova, Valladolid, 2009, p. 268). Entonces, la aplicación de la nueva jurisprudencia del TS sería extremadamente perjudicial para el interés y bienestar de las víctimas que decidan rehacer su vida tras el sufrimiento que le conllevó su relación anterior.

suficientes ingresos como para mantener dignamente a ellos y a su persona. En este caso podría justificarse que el otro ex-cónyuge contribuye con una pensión alimenticia. No obstante, las pensiones alimenticias que puedan llegar a recibir los hijos están ajustadas al patrimonio del ex-cónyuge que la abona (art. 146 CC), lo cual no significa que siempre vaya a suponer un enriquecimiento injusto para el ex-cónyuge que conviva con el hijo. Es decir, no se produce siempre esa situación de injusticia en la cual se ve perjudicado el ex-cónyuge no usuario de la vivienda, tanto por no tener el derecho de uso de la misma como por tener que abonar la pensión de alimentos.

Es interesante esta situación porque conecta con una jurisprudencia reiterada por el Tribunal Supremo, según la cual la introducción de una nueva pareja a la vivienda que antes era familiar afecta a la pensión de alimentos para equilibrar una situación potencialmente injusta. Esta medida me parece, desde luego, más que razonable, sobre todo de cara a la protección del interés del otro ex-cónyuge que no está usando la vivienda. La reducción de la pensión de alimentos funcionaría como un mecanismo de equilibrio entre ambos ex-cónyuges, que verían asimilado el contenido de sus obligaciones: el ex-cónyuge no usuario contribuiría con una cantidad menor; y el ex-cónyuge usuario mantendría el uso de la vivienda junto con su pareja.

No obstante, considero que esta situación de desequilibrio en la cual se encuentra desprotegido el ex-cónyuge no usuario no tiene por qué producirse siempre:

Pueden darse dos escenarios: que el tercero introducido contribuya a las cargas de los hijos e incluso de la vivienda y se vea favorecido el ex-cónyuge usuario de la vivienda; o, que no lo haga y, por tanto, se vea perjudicada el ex-cónyuge custodio por ver reducida la pensión alimenticia de sus hijos. En ambos casos el ex-cónyuge no usuario de la vivienda puede verse perjudicado por no ver su contribución reducida, en el primer caso para equipararla a la contribución que hace la nueva familia residente en la vivienda; y en el segundo caso por mantener al tercero con el que se formó la nueva familia. Esta última situación parece plausible aplicar la reciente doctrina del TS y, por tanto, justificar la pérdida del derecho de uso de la vivienda familiar por estar siendo usada de mala fe y perjudicando a la otra parte.

El Tribunal argumenta que la parte usuaria que introduce al tercero en la vivienda puede adquirir la parte de la vivienda del otro propietario, lo que me parece un

argumento de poco peso dada la situación económica nacional actual unida a la pobre situación económica familiar que se produce tras la ruptura de una pareja - sobre todo en situación de disolución de sociedad de gananciales, aunque evidentemente dependerá de cada caso concreto-.

Desde el punto de vista del ex-cónyuge no usuario, una decisión para favorecer al mismo que puede tomarse por parte del ex-cónyuge usuario es buscar una vivienda alternativa con su nueva pareja -o mudarse a la de esta última, en su caso-, para evitar el eventual perjuicio de la otra parte. Desde luego estas muestras de buena fe no son abundantes, sobre todo si cabe la posibilidad de seguir conviviendo en la vivienda que fue familiar sin soportar gasto alguno -o soportando solo una parte-. También hay que tener en cuenta para aplicar la nueva doctrina de la STS 642/2018 si efectivamente la pérdida del uso de la vivienda por parte del ex-cónyuge usuario supondría un beneficio notable para el ex-cónyuge no usuario de la misma, puesto que si ello no conlleva una mejora de la situación de este se podría entender que se está realizando un acto de mala fe con la intención de perjudicar a la otra parte

De acuerdo con el TS, en el caso de que ambos ex-cónyuges sean propietarios de la vivienda, la decisión más justa para ambos -aunque más potencialmente perjudicial para los menores- sería que ellos o, en su defecto, el Juez acordasen la venta de la vivienda para evitar seguir litigando sobre la misma. Así lo extraigo del apartado cuarto del artículo 81 del Código de Derecho Foral Aragonés que dice que *«cuando el uso de la vivienda sea a título de propiedad de los padres, el Juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares»*. Es decir, si la vivienda supone un conflicto continuo entre los ex-cónyuges, la mejor opción para el bienestar de ambos y el de los hijos sea vender la vivienda y pasar a residir cada uno de ellos en viviendas diferentes y adecuadas para el mantenimiento de los hijos menores, protegiendo así a su vez el interés del menor.

Luego, en concordancia con el Tribunal Supremo, en el caso de que no existan hijos económicamente dependientes, la interpretación de la nueva jurisprudencia respecto a este tema puede ser más libre, puesto que no se tiene que atender al interés superior del menor. Hago referencia a los supuestos en los que es de aplicación el párrafo tercero del artículo 96 CC. Ante estas situaciones de convivencia con un tercero por parte del ex-cónyuge usuario en la vivienda que antes sirvió como familiar, afirmo rotundamente

que el otro ex-cónyuge tiene derecho a que exigir que tal uso cese, no para ocupar él la vivienda o recuperar su propiedad -en caso de que sea el único titular de la misma-, sino por razones de justicia y para evitar un enriquecimiento injusto de la otra parte. En mi opinión, esta es una herramienta fundamental para luchar contra el abuso de derecho y las actuaciones de mala fe que, en estos supuestos, son prácticamente presumibles.

Por otra parte, en relación al tema que nos ocupa y fijándonos en el derecho italiano -concretamente el artículo 336 *sexies* del Código civil italiano<sup>57</sup>- que, acorde con esta nueva jurisprudencia del TS, afirma que la situación de convivencia del ex-cónyuge con un tercero en la vivienda familiar produce la extinción del derecho de uso de la misma, incluso cuando residan hijos menores en ella. Sin embargo, de acuerdo con la opinión que sustento, la propia doctrina italiana ha venido entendiendo esta situación como inconstitucional argumentando que vulnera el principio constitucional de velar por los hijos, que implica tener un espacio en el que mantenerlos y desarrollar la vida familiar<sup>58</sup>.

De acuerdo con esta doctrina, opino que la extinción del derecho al uso de la vivienda procede solamente en el caso de que esta nueva convivencia con un tercero perjudicase a los menores. También sería una solución lógica en caso de que el patrimonio del ex-cónyuge custodio -o del tercero- fuese suficiente como para asegurar las necesidades de los menores y de su persona.

Por otra parte, el Tribunal argumenta que el derecho de uso de la vivienda se extingue por perder esta su carácter familiar dado que deja de servir para los fines del matrimonio. No obstante, encuentro este argumento incompleto, dado que tras la disolución del vínculo matrimonial ya no existe matrimonio y la atribución del uso de la vivienda se realiza teniendo en cuenta el interés superior del menor y, en su caso, el

---

<sup>57</sup> **«Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.**

*Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.*

*In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.»*

<sup>58</sup> CHAPARRO MATAMOROS P. APUNTES SOBRE EL DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN ITALIA. NOTES ON THE RIGHT TO USE FAMILY HOME IN ITALY. Rev. Boliv. de Derecho N° 26, julio 2018, ISSN: 2070-8157, pp. 360-377

interés familiar más necesitado de protección (art. 103.2ª CC). Por ello –en caso de existencia de hijos menores-, al residir el ex-cónyuge custodio con los hijos en la vivienda, el núcleo familiar se encontraría en la misma y, por tanto, la unidad familiar protegida por la norma (art. 96 CC) se encuentra en la vivienda.

Además, el TS argumenta que la pérdida del carácter familiar se produce por no ofrecer protección a la familia. Eso puede suceder en caso de que, según lo analizado en este Trabajo, las circunstancias aconsejen proteger al ex-cónyuge no usuario. No obstante, en caso de que el interés más necesitado sea el del ex-cónyuge usuario y, además, si existen hijos menores de edad, lo más indicado sería permitir el uso de la vivienda puesto que esta cumple su función de protección a la familia, aunque en la misma conviva un tercero. Es decir, de nuevo, hay que valorar las circunstancias y hacer un juicio de proporcionalidad para comprobar si es pesa más el perjuicio económico del ex-cónyuge no usuario o la necesidad de vivienda de los menores –y el otro ex-cónyuge-.

Luego, en relación a esto, también hay que comprobar si efectivamente el uso de la vivienda junto con un tercero realmente perjudica al otro ex-cónyuge o se pretende la modificación de medidas por mala fe.

En conclusión, reitero que es un tema cuyo abordaje implica tener en cuenta diferentes situaciones con sus complicadas y divergentes vicisitudes, a las que hacer frente desde la perspectiva de un Juez puede ser complicado. El TS ha sentado esta nueva doctrina acertadamente por motivos de justicia social, pero desconozco hasta qué punto esta justicia se llevará efectivamente a cabo, o si se utilizará como un arma para perjudicar al ex-cónyuge.

## **VIII. BIBLIOGRAFÍA**

### **1. LEGISLACIÓN**

- Constitución Española
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
- *R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile* (Código civil italiano)



- LO 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
- Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.
- Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.
- LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

## **2. JURISPRUDENCIA**

- STS 1199/1994, de 31 de diciembre.
- STS 1085/1996, de 16 de diciembre
- STS de 12 de septiembre de 2005 (RAJ\2005\7148)
- STS 221/2011, de 1 de abril
- STS 642/2011, de 5 de septiembre
- STS 183/2012, de 30 de marzo (RJ\2012\4584)
- STS de 31 de mayo de 2012
- STS de 19 de noviembre de 2013
- STS 557/2016, de 21 de septiembre (RJ\2916\4448)
- STS 33/2017, de 19 de enero
- STS 167/2017, de 8 de marzo (RJ\2017\1633)
- STS 525/2017, de 27 de septiembre
- STS 563/2017, de 17 de octubre (RJ\2017\4528)
- STS 268/2018, de 9 de mayo

- STS 630/2018, de 13 de noviembre (RJ\2018\4930)
- STS 641/2018, de 20 de noviembre (RJ\2018\5086)

### 3. DOCTRINA

- DE HOYOS SANCHO, M. (coord.), *Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales*, Lex Nova, Valladolid, 2009
- GIL MEMBRADO. C. *La vivienda familiar*. Editorial Reus, 2013.
- DE VERDA Y BEAMONTE. J.R. *La atribución del uso de la vivienda familiar en casos de divorcio en derecho español: la superación del derecho positivo por la práctica jurisprudencial*. Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm.3 bis, noviembre 2015,
- MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ. C. *Curso de Derecho Civil (IV): Derecho de Familia*. Edisofer, 5ª Edición, 2016, P. 39.
- VERDERA IZQUIERDO B. *Estudio de los últimos postulados referentes a la atribución del uso de la vivienda familiar. La “necesidad de vivienda”* Revista InDret, Barcelona, 2016.
- APARICIO CAROL, I. *La pensión de alimentos de los hijos en el Derecho español* p. 331, 2018, Tirant Lo Blanch.
- CHAPARRO MATAMOROS. P. *Derecho de uso y vivienda familiar: su atribución judicial en los supuestos de crisis familiares*, Tirant Lo Blanch, 2018.
- CHAPARRO MATAMOROS. P. *APUNTES SOBRE EL DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN ITALIA. NOTES ON THE RIGHT TO USE FAMILY HOME IN ITALY*. Rev. Boliv. de Derecho N° 26, julio 2018, ISSN: 2070-8157

## **IX. ANEXOS**

Adjunto las STS 641/2018 de 20 de noviembre y 33/2017 de 19 de enero